

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

5

DEL PRIMER
PERONISMO
A LA CRISIS
DE 2001

DIRECTOR DE TOMO: OSVALDO BARRENECHE



unipe: editorial
universitaria

edhasa

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COLECCIÓN DIRIGIDA POR JUAN MANUEL PALACIO

El golpe militar de 1943 constituye el prólogo de la llegada del peronismo, que apenas dos años más tarde ya gobierna el país. Diciembre de 2001 es la fecha de mayor crisis de la Argentina contemporánea. Estaba anunciada, y no por ello fue menos virulenta. Entre uno y otro momento, que abren y cierran este volumen, la sociedad anheló y luego lamentó golpes militares, sufrió la dictadura de 1976 a 1983, celebró el retorno de la democracia. Fue un tiempo de sueños, movilizaciones, decepciones y violencia.

En estas décadas la Argentina redefinió varias veces su proyecto político, económico y social. Se vivieron la ocupación plena y la desocupación extrema; el boom de la industria y su ocaso; una marcada disminución de la pobreza y su estallido más agudo. A la vez, cambió la matriz productiva; la relación entre las zonas rurales y urbanas; la vida de los trabajadores; el formato de las familias y los usos culturales. Cada uno de estos puntos se expresó con nitidez en la provincia de Buenos Aires, que fue el epicentro del desarrollo argentino y el territorio que más sufrió el declive; que vio crecer significativamente su población, al tiempo que se resentían las prestaciones sociales.

Este volumen dirigido por Osvaldo Barreneche, el quinto de la Historia de la provincia de Buenos Aires, da cuenta de estas grandes transformaciones. Analiza los distintos períodos históricos, y cómo fue cambiando la estructuración social y política. Si alguien mira la provincia en 1943 y en 2001, parecen dos provincias dramáticamente distintas. Este libro explica cómo se gestó ese proceso, quiénes ganaron y quiénes perdieron y cuáles son las herencias que nos dejó la historia.

ISBN 978-987-628-304-5



9 789876 283045

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Colección Historia de la provincia de Buenos Aires
Director: Juan Manuel Palacio

PLAN DE LA OBRA

Tomo 1: Población, ambiente y territorio

Director: Hernán Otero

Tomo 2: De la Conquista a la crisis de 1820

Director: Raúl O. Fradkin

**Tomo 3: De la organización provincial
a la federalización de Buenos Aires
(1821-1880)**

Directora: Marcela Ternavasio

**Tomo 4: De la federalización de Buenos Aires
al advenimiento del peronismo (1880-1943)**

Director: Juan Manuel Palacio

Tomo 5: Del primer peronismo a la crisis de 2001

Director: Osvaldo Barreneche

Tomo 6: El Gran Buenos Aires

Director: Gabriel Kessler

**DEL PRIMER PERONISMO
A LA CRISIS DE 2001**

Director de tomo: Osvaldo Barreneche

unipe: editorial
universitaria

 edhasa

Barreneche, Osvaldo
Historia de la provincia de Buenos Aires: del primer
peronismo a la crisis de 2001/Osvaldo Barreneche;
dirigido por Juan Manuel Palacio. - 1a ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Edhasa; Gonnet: UNIPE:
Editorial universitaria, 2014.
448 p.; 22,5x15,5 cm.

ISBN 978-987-628-304-5

1. Historia Política de Buenos Aires. I. Palacio, Juan
Manuel, dir.
CDD 320.982 12

Imagen de tapa: Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”

Diseño de tapa: Eduardo Ruiz

Diseño y realización de mapas: Mgter. Santiago Linares y Lic. Inés Rosso, Centro de Investigaciones
Geográficas, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Tandil, Argentina. Aprobado por el Instituto Geográfico Nacional,
Expediente GG12 0363/5, 14 de marzo de 2014.

Primera edición: mayo de 2014

© UNIPE: Editorial Universitaria, 2014
Camino Centenario 2565
(B1897AVA) Gonnet
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (0221) 484-2697
www.unipe.edu.ar

© Edhasa, 2014
Córdoba 744 2° C, Buenos Aires
info@edhasa.com.ar
<http://www.edhasa.com.ar>

Avda. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona
E-mail: info@edhasa.es
<http://www.edhasa.es>

ISBN: 978-987-628-304-5

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de
ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

Impreso por Arcángel Maggio – División libros

Impreso en Argentina

Índice

Prólogo	9
<i>Osvaldo Barreneche</i>	

Ensayo introductorio. Buenos Aires en el contexto nacional, 1943-2001	13
<i>Aníbal Viguera y Osvaldo Barreneche</i>	

Primera Parte

Capítulo 1. La sociedad bonaerense, 1943-2001	53
<i>Eduardo José Míguez y María Estela Spinelli</i>	

Capítulo 2. Política bonaerense y gestiones gubernativas, 1943-2001	89
<i>Claudio Panella</i>	

Capítulo 3. Economía y desempeño industrial	117
<i>Marcelo Rougier</i>	

Capítulo 4. Estructura y políticas agrarias	147
<i>Javier Balsa</i>	

Segunda Parte

Capítulo 5. Partido y Estado en el primer peronismo	181
<i>Oscar H. Aelo</i>	

Capítulo 6. Violencia política y terrorismo de Estado, 1955-1983	209
<i>Laura Lenci</i>	

Capítulo 7. Entre historia y memoria: la política bonaerense desde la reconstrucción democrática	237
<i>Marcela Ferrari</i>	

Capítulo 8. Participación política, sufragio y representación de las mujeres en la provincia de Buenos Aires	279
<i>Adriana Valobra</i>	
Capítulo 9. La experiencia de los obreros rurales bonaerenses.....	303
<i>Juan Manuel Villulla</i>	
Capítulo 10. Industria pesquera y mundo obrero.....	329
<i>Agustín Nieto</i>	
Capítulo 11. La experiencia cooperativa en el agro bonaerense	359
<i>Graciela Mateo</i>	
Capítulo 12. Familias chacareras bonaerenses.....	383
<i>Alejandra de Arce</i>	
Capítulo 13. Los cambios culturales en el interior de Buenos Aires. Género, juventud y familia	413
<i>Paola Gallo y Daniel Míguez</i>	
Colaboradores	439

Prólogo

Osvaldo Barreneche

El presente volumen trata acerca de la historia de la provincia de Buenos Aires entre 1943 y 2001. Su punto de partida está marcado por una fecha importante. Sin embargo, los historiadores sabemos que un punto en la cronología, de por sí, es sólo una referencia que nos puede orientar hacia una mudanza de época, que generalmente antecede y sucede en el tiempo al año elegido como bisagra. Así, el lector de este quinto tomo rápidamente advertirá que varios de sus autores se retrotraen a la década del treinta e “invaden” un poco el período del cuarto volumen, para articular las primeras explicaciones que dan sentido a los argumentos que luego desarrollan, en detalle, a partir de 1943.

El año 1943, igualmente, tiene peso propio y amerita la división entre éste y el precedente tomo de la colección. El golpe de Estado sucedido durante su transcurso, que pone fin a los gobiernos conservadores de la década del treinta e inicia el proceso de emergencia del peronismo en la Argentina en general, y en la provincia de Buenos Aires en particular, no es un dato menor. Como tampoco lo es, a nivel global, el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría, que coinciden con lo acontecido en los años siguientes a 1943. El mundo se encaminaba hacia un gran cambio, transcurrido durante las turbulentas décadas que conforman la segunda mitad del siglo XX, del que los sucesivos capítulos de este tomo también dan cuenta.

Al tratarse de la quinta pieza de esta colección, que cubre la etapa más reciente del pasado bonaerense, esta obra no llega “hasta hoy” sino que se detiene en el año 2001. La tremenda crisis desatada en las postrimerías de aquel año marcó profundamente a la sociedad argentina y bonaerense; no dejó ningún aspecto de la vida social, económica y cultural sin penetrar. Y abrió paso a una época nueva que aún continúa. Desde el análisis histórico, la crisis del 2001 fue el punto de llegada

escogido para dar sentido a los diversos argumentos presentados en este volumen y que recorren la segunda mitad del siglo pasado. No obstante, como ya se advertirá, los autores no se detienen abruptamente en ese año; proponen al lector, de diversas maneras, líneas de reflexión que le permiten avanzar desde aquella crisis en el análisis y la proyección de los temas abordados.

Aun cuando este tomo de la colección abarca la parte más contemporánea del pasado bonaerense, no es el último. Le sucede un sexto volumen, destinado a la historia del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense, que coincide con el período histórico que el presente volumen desarrolla. La importancia de dicho espacio histórico-cultural en la historia del siglo XX bonaerense y argentino, como la dispersión analítica de su tratamiento histórico, ameritaron el nacimiento de este último tomo. Sin embargo, esta decisión planteó todo un desafío para su volumen precedente, es decir, este que el lector tiene entre sus manos. ¿Cómo escribir sobre la historia de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XX “omitiendo” al conurbano bonaerense?

En realidad, para los colaboradores de este volumen, dicha omisión deliberada no ha sido tal. Cada vez que fue necesario referirse a este conglomerado urbano que rodea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha hecho. Asimismo, consideramos que había muchos y variados asuntos en la historia de esta provincia que tenían como escenario central sus vastas planicies y sus ciudades de diversa envergadura, desparrramadas por una geografía heterogénea y generosa, que se extiende mucho más allá de los confines del conurbano. Al pensar la política, la economía, la cultura, no fue difícil hallar el peso específico del vasto espacio “interior” estudiado.

Tal vez el mayor desafío que surgió en las etapas iniciales del proceso de escritura de la obra no fue tanto la anticipada y, según se ha dicho, relativa circunscripción espacial que dejaba para otro tomo al Gran Buenos Aires, sino la selección de temas históricos relevantes a ser considerados para este volumen. En efecto, ¿cómo mantener una extensión proporcional a los otros tomos de la colección sin ignorar los temas centrales de la historia provincial durante la segunda mitad del siglo XX? La solución no fue original, en el sentido de diferente, sino que imitó la organización de trabajos presentada en los volúmenes anteriores. De esta manera, y luego de un ensayo introductorio en el cual se

procura realizar un recorrido histórico bonaerense en sus sinuosas concordancias y disidencias según el contexto nacional, se proponen dos partes.

La primera la componen cuatro capítulos, en los que se analizan los aspectos socioculturales, económicos y políticos de todo el período que abarca el tomo: 1943-2001. Dentro de los estudios económicos, se consideran especialmente la industria y el agro.

La segunda parte presenta nueve capítulos referidos a temáticas más específicas, algunas de las cuales se circunscriben a períodos históricos determinados que no necesariamente abarcan toda la segunda mitad del siglo XX. Según los temas y enfoques, algunos capítulos refieren en particular a los años del primer peronismo, otros toman desde finales de la década de 1950 hasta el retorno a la democracia en 1983, mientras hay quienes centran su aporte en este último tramo temporal del volumen hasta el 2001. Las temáticas consideradas son, en muchos casos, transversales a otros temas con los que dialogan. Así, por ejemplo, en un capítulo se analizan a los trabajadores rurales en su especificidad, mientras que en otro se toma en cuenta una actividad económica determinada, como la pesca, para también introducir al lector en el mundo del trabajo relacionado con esa industria costera bonaerense.

En suma, más que una clave de lectura, este prólogo procura dar cuenta del recorrido que llevó a la producción de la obra. Ojalá que el lector se fascine, como les ha ocurrido a sus autores, con sus contenidos e igualmente con las pasiones que despierta una historia bonaerense que no nos ha dado respiro en los últimos setenta años.

Ensayo introductorio

Buenos Aires en el contexto nacional, 1943-2001

Aníbal Viguera y Osvaldo Barreneche

En este ensayo nos proponemos trazar ciertas líneas fundamentales que caracterizan el marco temporal abarcado por este volumen de la *Historia de la provincia de Buenos Aires*. Un período que comienza con el golpe militar del 4 de junio de 1943 –que cortó el ciclo autoritario-conservador iniciado en 1930 y dio paso a la conformación del peronismo, el movimiento político que signaría la historia argentina desde entonces– y que culmina en 2001 con una crisis de múltiples dimensiones, cuyo resultado más inmediato, a nivel nacional, fue la caída del gobierno de la Alianza (iniciado en 1999) en el marco de un alto nivel de movilización social y política y del colapso del modelo neoliberal que había comenzado a construirse desde mediados de los setenta. La provincia de Buenos Aires fue uno de los escenarios centrales del proceso de crisis de inicio del siglo XXI; sus efectos impactaron significativamente en el espacio económico, el tejido social y las prácticas culturales bonaerenses.

Es difícil pretender darle a esta larga etapa cierta unidad que permita reducir su complejidad con la finalidad de efectuar una síntesis analítica. Sin embargo, como intentaremos mostrar a lo largo de estas páginas, la emergencia del peronismo y el colapso del 2001 delimitan de algún modo una suerte de parábola que va desde la conformación de un modelo de crecimiento centrado en la industria, que pudo articularse con procesos relevantes de inclusión socioeconómica y de integración social, hasta la crisis de otro modelo que, desde 1976 en adelante, había ido desmantelando los parámetros del primero y había provocado un deterioro social caracterizado por niveles extremos de pobreza y desigualdad. Tal vez muchos lectores, fuesen o no testigos y protagonistas de aquellos años, evoquen aquí recuerdos de tantas historias personales

influenciadas fuertemente por dicho proceso. Enseguida, también, pueden venir a la mente imágenes de esa pobreza y esa desigualdad, localizadas particularmente en el conurbano bonaerense, cuyas características específicas serán analizadas en el sexto y último volumen de esta colección. No obstante, una de las certezas que este quinto volumen, dedicado al vasto interior bonaerense y a sus grandes ciudades, aporta entre sus contribuciones distintivas es que dicho proceso de desmantelamiento y deterioro social no se limitó a los sucesivos cordones que rodean la ciudad de Buenos Aires, sino que tuvo impacto y consecuencias significativas en la inmensidad del territorio bonaerense y en todo el país.

Un momento fundacional —el surgimiento del peronismo y las transformaciones producidas por éste desde el gobierno— y una crisis sin precedentes —el quiebre, en 2001, del modelo neoliberal consolidado en los años noventa— delimitan entonces un itinerario en el que la Argentina llegó a conocer niveles significativos de integración social para caer luego en un dramático retroceso hacia la fragmentación y la exclusión. En ese itinerario, la dictadura cívico-militar inaugurada en 1976 se convierte necesariamente en un punto de inflexión que va más allá de su dimensión brutalmente represiva para marcar el comienzo de un drástico giro en las características integrales de la sociedad argentina. La provincia de Buenos Aires no sólo refleja este derrotero general de la historia argentina de todos estos años sino además, como marcan con mucha claridad algunos de los trabajos incluidos en este volumen, expresa en algunas dimensiones y coyunturas sus aspectos más paradigmáticos y sus manifestaciones más extremas.

EL PERONISMO

El golpe militar del 4 de junio de 1943 puso fin a la etapa de la “restauración conservadora” que se había iniciado a su vez con otro derrocamiento, el de Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930. El nuevo gobierno militar albergaba tendencias heterogéneas, pero entre ellas comenzó a perfilarse una que, encabezada por el entonces coronel Juan Domingo Perón, se proponía construir una nueva hegemonía política basada en la combinación de políticas económicas nacionalistas e in-

dustrialistas con ciertos niveles de redistribución del ingreso, para lo cual procuraría conformar una base de apoyo en los sindicatos y en los sectores empresarios. El ascenso de Perón no pudo ser detenido a pesar de haber generado fuertes resistencias dentro y fuera de las Fuerzas Armadas; la masiva manifestación de apoyo del 17 de octubre de 1945 consolidó su liderazgo entre los trabajadores. Los eventos de aquel día tendrían como epicentro la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, pero la procedencia de las columnas obreras que llenaron la plaza en el atardecer del 17 de octubre excedieron, y mucho, los límites de la capital de la nación. Nutridos grupos de simpatizantes de Perón provinieron de todo el conurbano y de ciudades bonaerenses ubicadas más allá de los partidos que rodeaban la ciudad. Tal el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la carne que partieron de los frigoríficos ubicados en el partido de Berisso. Sin duda, este apoyo de los trabajadores bonaerenses, entre otros factores, abrió el camino para que Perón se convirtiera en presidente de la nación al ganar las elecciones de 1946.

El peronismo se constituyó a partir de ese momento en un movimiento político que logró interpelar exitosamente a los sectores populares, y conformó a partir de ello no sólo una sólida base de apoyo electoral sino además una identidad política que arraigaría profundamente en los trabajadores y persistiría aun en las duras épocas de proscripción política que vendrían después de 1955. Si bien este arraigo político-electoral tuvo un alcance nacional amplio y duradero, no en todas las provincias el peronismo representó de allí en más la primera fuerza electoral; en algunas de ellas hubo otras estructuras partidarias que lograron conservar o construir identidades políticas exitosas con capacidad de disputarle la mayoría. En este sentido, la provincia de Buenos Aires será, sí, uno de los baluartes fundamentales del peronismo como fuerza política: salvo entre 1983 y 1987, las elecciones para gobernador —cuando las hubo— fueron siempre ganadas por este movimiento. Si bien aquí su hegemonía se vio también disputada por diversas fuerzas partidarias en distintos momentos, Buenos Aires constituyó uno de los distritos donde durante todo el resto del siglo XX la competencia fundamental giró en torno a una dinámica bipartidista en la que competían peronismo y radicalismo.

Esta profunda marca en el sistema político se asienta sin duda en el hecho de que los dos primeros gobiernos del peronismo (1946-1952 y 1952-1955) produjeron una transformación fundacional en la sociedad

argentina, al consolidar significativos niveles de integración y democratización social. No ajeno a este fenómeno fue el afianzamiento del liderazgo de Domingo Mercante como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la primera presidencia de Perón, tal como explica Oscar Aelo en su capítulo de este volumen. De este modo, la transformación iniciada a nivel nacional tuvo su correlato específico en el ámbito bonaerense. A su vez, las políticas del peronismo en el poder establecieron determinados parámetros de funcionamiento del modelo de crecimiento económico que –no sin matices y transformaciones ulteriores– constituyeron los trazos fundamentales que la sociedad argentina mantendría al menos hasta 1976. Si bien esos parámetros habían comenzado a instalarse como resultado del escenario generado por las consecuencias de la crisis de 1930 y por las políticas que los propios gobiernos conservadores adoptaron frente a ella, fueron los gobiernos militares entre 1943 y 1946 y particularmente el gobierno peronista entre 1946 y 1955 los que constituyeron el paradigma basado en la industrialización sustitutiva y la creciente intervención estatal en un objetivo deliberado de las políticas de gobierno.

Este modelo de acumulación que se consolida entonces desde los años cuarenta tendrá como motor dinámico fundamental la inversión en la producción industrial orientada al mercado interno. El Estado comenzó a jugar un papel fundamental en la promoción del crecimiento industrial al fijar un conjunto de reglas del juego que se mantendrían más allá de la etapa peronista. En este sentido, el capítulo de Marcelo Rougier demuestra que este crecimiento industrial no se circunscribió a los establecimientos fabriles nacidos en los partidos del Gran Buenos Aires, sino que, con sus particularidades, se hizo visible en ciudades del interior bonaerense como Bahía Blanca, Azul, Tandil, Tres Arroyos, Junín, Necochea y San Nicolás, las cuales concentraban actividades específicas tales como las relacionadas con las industrias agroalimentarias, metalmecánicas y de minerales no metálicos.

Así, la industria creció a partir de entonces amparada en el proteccionismo, es decir, en la existencia de cupos, limitaciones y altos aranceles que encarecían o impedían el ingreso de productos importados. Esto preservó la actividad industrial de la competencia con los productos extranjeros y le permitió avanzar por el camino de una creciente sustitución de muchos artículos –hasta entonces importados– por pro-

ductos fabricados localmente. El Estado incrementó también su intervención activa a través de subsidios y orientó su poder de compra hacia las empresas nacionales. El sistema financiero estuvo a su vez regulado por el Estado que, a través de las decisiones del Banco Central, tendió a promover la existencia de bajas tasas de interés y a darle prioridad a la industria en la oferta de créditos bancarios. En sintonía con esta política nacional, la gestión de Arturo Jauretche al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1946 y 1950, como parte del equipo de gobierno de Domingo Mercante, también dio gran impulso a dicha actividad.

Por otro lado, el peronismo desarrolló una política tendiente a que el Estado controlara directamente un conjunto significativo de empresas consideradas estratégicas para la economía nacional. Su condición de “Estado empresario” en rubros clave de la economía le permitía tomar decisiones de política económica, como la de mantener las tarifas de los servicios públicos en niveles relativamente bajos o abastecer a la industria de ciertos insumos básicos a precios especiales.

Sin duda el sector agroexportador siguió teniendo una importancia central en el funcionamiento de este modelo de crecimiento. No sólo porque vastas regiones del país conservaron su perfil netamente agrario sino, y sobre todo, porque la producción primaria siguió siendo la principal proveedora de divisas al generar la mayor parte de las exportaciones. En cierta medida, sin embargo, las reglas del juego del nuevo modelo —al estimular preferencialmente las inversiones industriales— contribuyeron junto a otros factores al relativo estancamiento de la producción agraria que se mantuvo al menos hasta mediados de los sesenta. Quedaba planteada así la tensión entre el impulso industrial y el dinamismo decreciente del sector agroexportador: el propio crecimiento de la industria requería de un nivel cada vez mayor de importaciones de insumos y bienes de capital pero no generaba por sí las divisas para sostenerlo, las que seguían dependiendo fundamentalmente de la producción agraria. Ya en plena etapa peronista, concretamente a partir de 1949, este desequilibrio comenzó a ponerse en evidencia con los típicos cuellos de botella de la balanza de pagos que serían uno de los puntos críticos del nuevo modelo de acumulación.

Quizá más que cualquier otra región del país, la provincia de Buenos Aires pasó a reflejar en su propia configuración geográfica la coexistencia de los dos puntales del modelo de crecimiento en desarrollo: por un

lado –y sin mencionar el conurbano–, la emergencia de polos industriales significativos en ciudades del interior bonaerense como las señaladas anteriormente; por otro, el sector agrario, en el que las políticas peronistas favorables a los arrendatarios no alcanzaron para impedir un proceso que en el mediano plazo llevaría a una creciente concentración de las explotaciones. Es que la estructura agraria bonaerense, como puntualiza Javier Balsa en su capítulo, conservaba el mismo perfil con el que se había consolidado entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. En efecto, en los albores de la década de 1940, alrededor de un cuarto de los agricultores y los tamberos bonaerenses eran propietarios. Mientras tanto, sólo la mitad de los productores dedicados a la actividad ganadera era dueño de las tierras donde pastaban sus ganados. Y para el caso de los productores que combinaban la agricultura con la ganadería, los propietarios sólo representaban un tercio del total. La contrapartida de este panorama era la persistencia de los grandes latifundios, que pese a las políticas implementadas durante el gobierno peronista, no pudo alterarse. De hecho, la creciente estrechez de las posibilidades de acceso a la propiedad de la tierra en el espacio bonaerense generaría una tensión social que, según Balsa, llevaría a cuestionar la estructura social agraria pampeana en las décadas siguientes.

Ahora bien, el peronismo encarnó una variante específica de este modelo de crecimiento, aquella que intentaba –a través de otro conjunto distintivo de intervenciones estatales– combinar ese crecimiento industrial con políticas orientadas a la distribución del ingreso y a la inclusión de los sectores populares. Desde el punto de vista de la lógica misma de la acumulación, el énfasis en el mercado interno estaba acompañado por la intención de mantener un nivel relativamente elevado de los salarios y de complementar los ingresos populares mediante una batería de políticas sociales con el objeto de estimular la demanda agregada a través del consumo. Al mismo tiempo, esta orientación “nacional-popular” conllevaba una voluntad integradora e inclusiva respecto de las demandas populares, que se vinculaba a la vez con el fuerte impulso dado a la organización sindical de los trabajadores dentro de los marcos del Partido Justicialista (PJ) y la CGT. Esta lógica de construcción política no sólo se manifestó hacia fuera del peronismo, sino que inicialmente operó dentro de sus filas. Contrariamente a lo que una apreciación superficial de los comienzos del justicialismo pudiese indicar, en el sen-

tido de una secuencia histórica lineal basada en el liderazgo único e indiscutido de Perón, la provincia de Buenos Aires ofrece un ejemplo rico de las complejidades, marchas y contramarchas que este proceso ocasionó. Particularmente ilustrativo, en este sentido, es el capítulo de Oscar Aelo. Allí vemos cómo se va conformando una dirigencia peronista provincial, nacida de una heterogénea procedencia política que se nuclea en torno a la figura del coronel Domingo Mercante, cuya llegada a la gobernación fue fruto de una compleja negociación donde intervinieron diversos actores políticos. La consolidación de estos nuevos cuadros partidarios y de su gestión provincial llevaría, eventualmente, a un enfrentamiento con Perón y Evita, lo que motivó el desplazamiento de toda la dirigencia “mercantista” bonaerense. Si bien estos episodios no representaron una novedad histórica, en cuanto a que podemos rastrear desde mucho antes los enfrentamientos entre los presidentes de la república y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, no es menos cierto que la relación conflictiva entre mandatarios justicialistas nacionales y bonaerenses se reproduciría luego, ya sea en 1973, como desde 1983 en adelante, cada vez que el peronismo gobernase ambas jurisdicciones, tal como puede verse en los capítulos de Claudio Panella y Marcela Ferrari, respectivamente.

LA “REVOLUCIÓN LIBERTADORA”

Las políticas inclusivas y movilizadoras del peronismo, junto con algunos rasgos de su estilo, agudizaron una polarización que cobraría nuevo impulso en el marco de las dificultades económicas del segundo gobierno de Perón y del enfrentamiento de éste con la Iglesia. Así, el 16 de septiembre de 1955, una coalición cívico-militar autodenominada “Revolución Libertadora” derrocaba a Juan Domingo Perón cuando promediaba su segundo mandato constitucional. El golpe estuvo promovido y apoyado por sectores que, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, coincidían en un cerril antiperonismo que articulaba en realidad a voluntades políticas opositoras diversas. Entre los militares, el general Lonardi encabezaba a sectores que ya no estaban dispuestos a tolerar el liderazgo de Perón pero que no renegaban de los núcleos centrales de sus políticas socioeconómicas. Por su parte, otros jefes militares como Isaac

Rojas y Pedro Eugenio Aramburu representaban en cambio a los grupos más radicalmente antiperonistas que, encuadrados en buena medida en las perspectivas económicas más ortodoxas, cuestionaban a la vez el modelo económico y los avances logrados por los sectores populares en general y por el movimiento obrero organizado en particular.

Los grupos económicamente dominantes y sus expresiones corporativas apoyaron decididamente el derrocamiento de un gobierno que los afectaba en sus niveles de rentabilidad como empresarios, aunque sus intereses respecto de las políticas económicas específicas distaban de ser homogéneos. La Unión Cívica Radical (UCR) y los partidos de la izquierda tradicional (particularmente el Partido Socialista) confluyeron también en la coalición a la que justificaban como “libertadora” en relación con un gobierno al que no dudaban en calificar de “tiranía” sobre la base de las efectivas persecuciones de las que muchos de sus militantes habían sido objeto. Uno de ellos, de los más conocidos, fue el dirigente bonaerense Ricardo Balbín, acérrimo opositor a Perón. Balbín fue arrestado luego de emitir su voto en las elecciones provinciales de marzo de 1950, en las que se presentaba como candidato a gobernador por el radicalismo, según nos refiere Claudio Panella en su capítulo. Su detención en la cárcel de Olmos, cerca de La Plata, se prolongó por casi un año, y de esta manera aquel lugar de confinamiento se convirtió en uno de los epicentros de la oposición política al peronismo. A este encierro, seguido de cerca por los medios de comunicación de la época, se le sumaron tantos otros menos publicitados, por lo que la asociación del peronismo con una “tiranía” era común en el lenguaje de la oposición civil y militar de entonces. Es por eso que la caída de Perón fue vista como una “liberación” por parte de todos los sectores contrarios al Partido Justicialista.

Ahora bien, los partidos políticos de oposición que apoyaron la “Revolución Libertadora” se atribuían a sí mismos una pureza democrática que, sin embargo, lejos estaban de encarnar al derrocar a un gobierno que contaba con un amplio respaldo popular. La división “libertad” frente a “dictadura” recuperaba en parte el eje de campaña de la Unión Democrática de 1946 y servía para articular a las distintas fuerzas que por motivos diversos coincidían en la voluntad de quitar del medio a su adversario común. Para los partidos de izquierda el peronismo era el competidor que les había ganado la partida en su exitosa interpelación

a las clases trabajadoras; desde un punto de vista teórico podía esgrimirse también que al hacerlo las había encorsetado en un movimiento que las subordinaba al orden burgués. Paradójicamente, los socialistas se enrolaban en 1955 en una movida política que en los hechos restauraba el poder de los intereses inmediatos de la burguesía e inauguraba una fuerte ofensiva contra la clase obrera; como veremos, también paradójicamente, la “libertadora” iba a disparar una serie de debates que llevarían a plantear sobre nuevas y más complejas bases la cuestión de la relación entre izquierda y peronismo.

Para la UCR, por su parte, el peronismo era también un competidor a eliminar. Este partido canalizaba a la vez una suerte de “sentimiento antiperonista” que expresaba múltiples dimensiones pero parecía recluir básicamente de los componentes plebeyos de un movimiento que daba a los sectores populares una cuota de poder simbólico que resultaba intolerable para buena parte de los sectores medios. Esta sospecha, a su vez, se extendía a las relaciones de género manifestadas en términos de participación política. A partir del rol cada vez más visible que había tomado Eva Perón dentro del primer gobierno de su esposo, pero también mediante la sanción de la ley nacional del sufragio femenino y de su equivalente ley bonaerense de derechos políticos de 1947 que otorgaba a las mujeres de la provincia el derecho de elegir y ser electas —como detalla Adriana Valobra en su capítulo—, el peronismo provincial y nacional logró captar el mayoritario apoyo de las mujeres. Después de varias décadas, durante la primera mitad del siglo XX, en las cuales el radicalismo, en particular, y los partidos políticos opositores como el socialismo, en general, habían contado entre sus filas a mujeres que luchaban por los derechos políticos femeninos, durante el peronismo se vio cómo sus dirigentes también hicieron propias, a su modo, esas banderas de lucha. Así, mientras que en la Legislatura y los consejos deliberantes de los municipios bonaerenses comenzaba a observarse tíbicamente esa presencia peronista femenina, las opositoras brillaban por su ausencia. También en este espacio puede verse la emergencia y madurez de aquel “sentimiento antiperonista” que llevó a tantos a apoyar el golpe de Estado de 1955.

Por su parte, el gobierno militar —en el que ya en noviembre de 1955 el general Aramburu reemplazaba a Lonardi— inauguró una fuerte ofensiva contra la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales que ge-

neró del mismo modo diversas formas de protesta y acción directa que conformaron lo que se empezó a conocer como “la resistencia peronista”, caracterizada por tenaces acciones para mantener viva la imagen y el legado de Perón en tiempos difíciles. La coalición antiperonista se proponía eliminar al peronismo del sistema político y del imaginario de los sectores populares, persiguiendo a sus dirigentes y prohibiendo toda mención a Perón y a toda la simbología del movimiento. Esta pretensión, basada en el infundado supuesto de que el peronismo se había sostenido gracias a maniobras manipuladoras facilitadas por el control del aparato estatal, se reveló muy pronto como ilusoria: la etapa de la resistencia no hizo sino consolidar la identidad peronista de los sectores populares y potenciar incluso sus componentes más disruptivos. En 1958 el gobierno militar convocó a nuevas elecciones presidenciales apostando a restablecer los mecanismos constitucionales pero con la firme decisión de impedir el retorno del peronismo al poder. A partir de entonces y hasta 1973, el sistema político argentino funcionaría sobre la base, por un lado, de la proscripción del peronismo de la arena político-electoral en los breves interregnos en que ésta fue habilitada (1958-1962, con el gobierno de Arturo Frondizi a nivel nacional y de Oscar Alende en la gobernación bonaerense, y 1963-1966, con el gobierno de Arturo Illia como presidente y Anselmo Marini en la provincia de Buenos Aires), y por el otro, del predominio de los gobiernos autoritarios (1962-1963, tras el derrocamiento de Frondizi, y 1966-1973 tras la destitución de Illia).

LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA

Aunque con el golpe de 1955 los impulsores de un retorno a las políticas liberales y a un esquema económico basado en la producción primaria exportadora volvían a hacer oír su voz desde posiciones de poder, no fue esa la orientación que se consolidó en las políticas económicas que predominaron hasta 1976. Por el contrario, el modelo de crecimiento siguió funcionando sobre la base de los parámetros que se habían consolidado con el peronismo: la industria siguió siendo el eje dinámico de la acumulación, y el Estado mantuvo, e incluso incrementó, su rol interventor y regulador. Sin embargo, esos parámetros fueron profundizados en una dirección que,

en algunos aspectos centrales, sí marcaba un giro respecto del modelo nacional-popular. En efecto, y sobre todo a partir del gobierno nacional de Frondizi, se consolidó una orientación “desarrollista” que impulsaba el ingreso del capital extranjero y que procuraba dar un apoyo prioritario a las grandes inversiones en la producción de bienes intermedios y de capital, o en lo que suele denominarse “industria básica”. Para esto se consideraba funcional redireccionar las políticas de crédito y de subsidios hacia las grandes empresas locales y multinacionales. Esta orientación conllevaba también la voluntad de dejar de lado las políticas redistributivas y de altos salarios, para poner el énfasis en el intento de garantizar altos niveles de rentabilidad al capital más concentrado; en el mismo sentido, el impulso desarrollista incluía la pretensión de disciplinar a la clase trabajadora, no sólo frenando sus demandas sino procurando alcanzar una productividad más elevada a través de una mayor explotación de la mano de obra.

En la provincia de Buenos Aires, los gobernadores civiles elegidos junto a Frondizi en 1958 e Illia en 1963 desplegaron una agenda de gobierno que no siempre coincidió con el nivel nacional, especialmente en la aplicación de políticas desarrollistas tal cual se han descripto. Mientras en el territorio bonaerense se localizaban muchas de estas empresas nacionales y multinacionales beneficiadas por las medidas implementadas a nivel nacional, la acción gubernativa se orientó hacia otros aspectos demandados por los habitantes de la provincia. Tal como señala Claudio Panella en su capítulo, durante el gobierno de Oscar Alende se llevó a cabo un plan de construcción de viviendas y carreteras que buscaba cubrir los déficits en esa materia. Si, de acuerdo con lo indicado en el capítulo de Marcelo Rougier, la radicación de industrias en las ciudades del interior bonaerense se incrementó durante los años sesenta, fue en parte gracias a que, en los comienzos de esa década, la ampliación de la red vial pavimentada facilitó el acceso rápido a nuevos sitios, al tiempo que dicha red consolidaba el irreversible reemplazo del ferrocarril por el camión como medio de transporte de la producción. Confirmando la tendencia señalada, se destaca la promulgación de la ley provincial de promoción industrial durante la gobernación radical de Anselmo Marini. En este último caso, y en sintonía con la política energética a nivel nacional, se ampliaron los nodos conectivos de la red eléctrica mientras que se implementaron nuevos planes de construcción de viviendas en las grandes ciudades del interior provincial.

Más allá de beneficiar la expansión de industrias en ciertos puntos de la geografía bonaerense, estas medidas y obras de dichos gobiernos salían al cruce de otras tendencias que se desplegaban con gran fuerza en la provincia de Buenos Aires, a medida que la década del sesenta avanzaba. El capítulo de Eduardo Míguez y María Estela Spinelli, que sigue a esta introducción, da cuenta de los profundos cambios sociales ocurridos durante todo el período que abarca este volumen. Allí vemos que el crecimiento de la población urbana no se inicia sino que antecede a la segunda mitad del siglo XX. Ya en 1947, el 71% de los bonaerenses vivían en ciudades, porcentaje que se fue incrementando a lo largo de la segunda mitad del siglo. Así, las viviendas, las rutas y la energía, entre otros aspectos, también eran imprescindibles para brindar servicios a esta población. Míguez y Spinelli ejemplifican lo ocurrido en estos años con el crecimiento experimentado por las ciudades de Bahía Blanca y Mar del Plata. Con recorridos históricos diversos, vemos emerger a ambas ciudades como dos centros urbanos destacados por sobre otros en el espacio territorial bonaerense. En el caso de Mar del Plata, además de su perfil inicial de ciudad balnearia, otrora playa aristocrática y luego epicentro del turismo social a partir del peronismo, se consolida en su puerto una de las actividades económicas características del litoral bonaerense: la industria de la pesca. El capítulo de Agustín Nieto explica la evolución de esta actividad en los puertos de la provincia en general, y en el de Mar del Plata en particular. Nacida casi con la ciudad, en los albores del siglo XX, la pesca comercial marplatense había ganado en complejidad luego de setenta años. A las capturas tradicionales de caballa y anchoíta, nos informa Nieto, se sumaron las de castañeta para la producción de la harina de pescado, y la de merluza, para la elaboración del filet fresco o congelado. Así, en algún paseo por el puerto en los días en que el tiempo no dejaba disfrutar de la playa, los turistas de aquellos años podían ver, junto a las lanchitas costeras pintadas de amarillo –que todavía hoy forman parte de ese paisaje–, barcos de mayor porte dedicados a faenas mucho más complejas.

La creciente actividad industrial, comercial y de servicios, junto a otros factores, atrajo cada vez más a las personas hacia las ciudades bonaerenses. No eran éstas, en muchos casos, opciones totalmente libres. Durante la dictadura de Onganía se puso fin a las sucesivas prórrogas de los arrendamientos de tierras. Como informa en detalle el capítulo

de Javier Balsa, en 1968 se dio la expulsión de muchos chacareros de tierras que habían rentado, en algunos casos, por generaciones. A partir de ello, muchas de estas familias se trasladaron a las ciudades más cercanas. Un detallado informe de este proceso, ejemplificado gráficamente por sus cuadros y sus fotografías, puede verse en el capítulo de Alejandra de Arce en este volumen. Ella nos cuenta cómo la “familia chacarera” se vio afectada por estos cambios y cuáles fueron las estrategias llevadas a cabo para sobrevivir y seguir adelante. Se manifiesta particularmente en su relato y en las ilustraciones que lo acompañan el rol de la mujer en estas familias, tanto en las relaciones de género como en la educación de los hijos. Es que junto a los cambios económicos y sociales, iba creciendo en esos años una nutrida población juvenil que desafiaría las costumbres de sus padres. Por ejemplo, los bailes tradicionales de los pueblos y ciudades del interior bonaerense, “custodiados” por las madres chaperonas que desde su silla vigilante controlaban la conducta de sus hijas, dio paso a los “asaltos” o “malones” en las casas de familia, según detallan Paola Gallo y Daniel Míguez en su capítulo sobre los cambios culturales ocurridos en el interior bonaerense durante las últimas cinco décadas del siglo XX y que comienzan precisamente en estos años. Con la conciencia moral tranquila de que la sana diversión juvenil transcurría en ambientes familiares conocidos, las chaperonas fueron pasando a la historia mientras los jóvenes, desprovistos de la supervisión parental, convertían esos espacios de diversión en ámbitos de socialización de experiencias iniciáticas de las más variadas. Un cambio de época a nivel cultural no sólo se gestaba en las grandes ciudades, sino que era acompañado por jóvenes adeptos que lo encarnaban hasta en los más recónditos ámbitos del territorio bonaerense.

En este contexto de cambios en los que no siempre es posible dar fechas precisas, la señalada orientación económica y social, a la vez desarrollista y excluyente, tuvo ciertas oscilaciones pero fue la que tendencialmente se impuso como predominante entre 1955 y 1973, y se consolidó en particular bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía. He aquí, sí, una fecha que dejó una marca en todo este período. A diferencia de las anteriores, esta nueva dictadura inaugurada el 28 de junio de 1966, pomposamente autodenominada “Revolución Argentina”, encarnaba un proyecto autoritario de carácter fundacional y de largo alcance. Ya no se trataba de destituir a un gobierno civil para convocar en

poco tiempo a nuevas elecciones, sino de llevar adelante un profundo proceso de reestructuración económica y social que sólo después de un largo período podría en todo caso desembocar en un nuevo formato político de democracia controlada. El gobierno de Onganía clausuró de manera drástica la actividad política –lo que afectó a todas las fuerzas partidarias, ya no sólo al peronismo– e implementó políticas autoritarias que invadieron ámbitos de la vida cotidiana e instituciones educativas: así, por ejemplo, las universidades nacionales que desde 1955 habían funcionado bajo los parámetros de la autonomía universitaria, inspirados en la reforma de 1918, fueron intervenidas y sometidas a episodios represivos. Si bien las imágenes de la denominada “Noche de los bastones largos”, del 29 de julio de 1966 tuvieron su epicentro en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, desalojadas por la policía, a ésta le sucedieron otras “noches” en las cuales todas las universidades localizadas en territorio bonaerense sufrieron la misma suerte. En este sentido, el capítulo de Laura Lenci es muy ilustrativo, pues no solamente se concentra en el cenit de la represión estatal ilegal ocurrida a partir de la dictadura militar de 1976. Antes, su desarrollo nos conduce por las décadas del cincuenta y sesenta, y se detiene en episodios clave –como este de 1966– en los cuales se ve la emergencia de los componentes centrales del terrorismo de Estado, que va a tener en el espacio bonaerense uno de sus escenarios más tristemente célebres.

También en estos años, acompañando los cambios señalados, y en el marco de la creciente represión estatal y la obturación de los canales institucionales de participación, surge una y otra vez una pregunta: ¿Qué hacer con el peronismo y con su exiliado líder? Si este movimiento político –encarnado por un lado en la organización sindical y al mismo tiempo en una persistente identidad peronista que atravesaba a la mayoría de los trabajadores– no podía ser eliminado, tampoco entre 1955 y 1976 se suprimió la trama de leyes, decretos y prácticas que en conjunto mantenían un esquema de relaciones laborales con fuertes componentes de protección y empoderamiento del trabajo frente al capital. El modelo de crecimiento que hemos descripto, sin superar las condiciones de explotación y de asimetría que conlleva el carácter capitalista de la sociedad argentina, y a pesar de la ofensiva empresarial que implicó el avance del desarrollismo excluyente, funcionó durante toda esta etapa articulado a un sistema de relaciones de poder social y de

reglas del juego que permitía a los trabajadores –fuertemente organizados a través de la estructura sindical– enfrentar una y otra vez –con éxito variable y siempre relativo– los intentos de los sectores dominantes de incrementar sus niveles de ganancia y de control sobre los procesos de trabajo. Un relativamente elevado nivel de integración social a través del trabajo, en condiciones bastante cercanas al pleno empleo, constituía a la vez la base y la expresión de esta relación de fuerzas. Los intentos de transformar este equilibrio a favor del capital están en buena medida en la base de las políticas excluyentes y de las ofensivas autoritarias más contundentes del período, como lo fueron las de los años de Onganía y de sus respectivos interventores militares en la provincia de Buenos Aires; estos objetivos se articularon con el impulso represivo vinculado al avance de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” en el contexto de la Guerra Fría –abordada también en el capítulo de Laura Lenci– y dieron lugar al creciente despliegue de prácticas represivas legales e ilegales desde el aparato estatal.

Vistas en el mediano plazo, estas ofensivas lograron que los niveles de productividad superaran los niveles de recuperación de ingresos que los trabajadores lograban imponer una y otra vez. Pero al mismo tiempo, las condiciones estructurales que de algún modo favorecían la capacidad de resistencia de la clase obrera permitieron que esas luchas adquirieran, desde mediados de los años sesenta, rasgos de radicalización que llevarían a incrementar cuantitativa y cualitativamente el desafío planteado a los intereses dominantes. En este sentido el Cordobazo de 1969 constituye un momento culminante de esas luchas con nuevos protagonistas y objetivos, pero fundamentalmente el punto de inflexión a partir del cual las acciones obreras se articularían con un proceso de radicalización política de más amplio espectro. Lo iniciado en Córdoba se continuó de inmediato en la provincia de Buenos Aires, a nivel capilar, frente a la perplejidad de las autoridades militares en el gobierno.

Al avance autoritario se le opuso, en efecto, no sólo la resistencia de la clásica estructura sindical, sino además un despliegue de nuevas fuerzas sociales y políticas que, si heterogéneas, tenían en común un horizonte que adquiriría un tono crecientemente disruptivo y en buena medida revolucionario. En el plano sindical, nuevas corrientes desafiaron a las conducciones peronistas desde posicionamientos que conllevaban una orientación clasista (en tanto apuntaban a la superación del

orden capitalista) o que, sin alcanzar niveles ideológicos tan definidos, asumían acciones y objetivos cada vez más combativos respecto de la dominación de los empresarios sobre el proceso de trabajo. A esto se le sumó la emergencia de nuevas fuerzas partidarias en el campo de la izquierda, que en gran parte resultaron de sucesivas rupturas o desprendimientos de los viejos partidos socialista y comunista, pero también fueron producto de una compleja trama de trayectorias militantes de origen diverso que surgieron en un ambiente en el que la influencia de la revolución cubana y la fuerte ofensiva autoritaria promovían constantes replanteos acerca de los horizontes y las prácticas que debía asumir la lucha revolucionaria. En ese entramado de nuevas militancias que se inclinaban hacia vertientes cada vez más radicalizadas tuvo también mucho que ver la búsqueda de una convergencia entre izquierda y peronismo, que comenzó a desplegarse desde ambos campos: el desafío que introdujo el contexto de persecución al movimiento peronista llevó a muchos a repensar una relación que había nacido como antagónica en los años cuarenta. Así, con afluentes militantes provenientes desde fuera y desde dentro del propio tronco justicialista, se fue consolidando una corriente que –con un componente predominantemente juvenil– a comienzos de los años setenta ya era reconocida como la “tendencia revolucionaria” del peronismo. La militancia en los ámbitos universitarios, profesionales e intelectuales también se vio atravesada por esta radicalización política y por la creciente confluencia entre peronismo e izquierda. En este ámbito se dio también la emergencia de diversos grupos que optaron por la lucha armada, los que hacia 1970 confluyeron en dos grandes organizaciones político-militares: Montoneros (ligada a la tendencia revolucionaria del peronismo) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores). El despliegue territorial de estas dos organizaciones penetró de forma profunda el espacio bonaerense. Esta capacidad operativa y la creciente militancia adpta tuvieron su triste y posterior correlato en la proliferación de muchos centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires a partir de la dictadura militar de 1976. En cada ciudad bonaerense, como La Plata, Mar del Plata o Bahía Blanca, sin descartar por supuesto el Gran Buenos Aires, donde estas organizaciones en general juveniles tuvieron un mayor número de militantes, se instaló luego uno o más centros clandestinos de de-

tención, como puede verse con claridad en el capítulo de Laura Lenci de este volumen.

Así, desde los inicios de la década del setenta y frente a la agudización de la conflictividad social y política, las Fuerzas Armadas, luego de reemplazar a Onganía por Levingston y a éste por Lanusse, decidieron abandonar el proyecto fundacional que habían iniciado en 1966 y apostar una vez más a una salida político-electoral, esta vez pensada como instancia que podría reabsorber el conflicto a través de canales institucionales. Esta apertura desembocó en las elecciones nacionales del 11 de marzo de 1973, en las que –proscripto Perón, aunque ya no el peronismo– la fórmula Cámpora-Solano Lima del Frente Justicialista por la Liberación se impuso con el 49% de los votos. El peronismo ponía en evidencia su capacidad para seguir concitando el apoyo mayoritario, en particular de los sectores populares pero en esta oportunidad también de un núcleo significativo de sectores medios movilizados que formaban parte del proceso de radicalización política que hemos mencionado. El retorno del peronismo al poder y de su líder a la presidencia el 12 de octubre de 1973 –dado que Perón triunfó ampliamente en las elecciones abiertas a partir de la renuncia de Cámpora ocurrida tres meses antes– generaba expectativas diversas, desde las que lo creían el único partido capaz de reencauzar el conflicto político en términos moderados hasta quienes aspiraban a que el movimiento peronista pudiera ser el instrumento para avanzar hacia un proceso profundo de transformación al que muchos conceptualizaban como un “socialismo nacional”. En realidad el propio espectro de la militancia peronista abarcaba ambas posibilidades y otros matices intermedios; y también en su seno se iría consolidando rápidamente otra tendencia, esta vez radicalizada pero hacia la derecha, que apuntó a erradicar del movimiento –y no sólo de él– a todas las expresiones de la izquierda revolucionaria y del sindicalismo antiburocrático.

La compleja y agitada coyuntura de 1973-1976 marcó una trágica condensación y aceleración de los conflictos, al agudizarse el enfrentamiento entre los proyectos en pugna que, con viejos y nuevos actores, venían configurando una dinámica política en la que la polarización peronismo-antiperonismo se desdibujaba en el marco de una confrontación más general entre izquierda y derecha, o al menos entre ruptura y conservación del orden social. En el propio seno del gobierno, un efi-

mero momento en el que parecía predominar la tendencia más radicalizada del peronismo cedió paso, primero, a la decisión de Perón de volver a recostarse en los actores clásicos del movimiento –viejos cuadros políticos y dirigencias sindicales tradicionales– y luego a la creciente presencia en los núcleos de poder de una ultraderecha que, encabezada por José López Rega, se convertiría en la punta de lanza de los planes más regresivos y represivos que terminarían por imponerse en 1976. La muerte de Perón el 1° de julio de 1974 redujo drásticamente las posibilidades de organizar a los distintos grupos que se disputaban el control del gobierno y su orientación.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, este itinerario tuvo dos estaciones claramente definidas: el gobierno de Oscar Bidegain, que asumió el 25 de mayo de 1973 apoyado en los cuadros de la tendencia revolucionaria, y el de su vicegobernador Victorio Calabró, un dirigente sindical vinculado a los grupos de ultraderecha que desplazó al primero en enero de 1974. No fue este reemplazo un hecho fortuito. El día anterior a la renuncia de Bidegain a la gobernación, un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo atacó el cuartel militar de la ciudad bonaerense de Azul. Como indica Lenci en su capítulo, Perón prácticamente culpó a Bidegain y sus acólitos de la tendencia revolucionaria por estos hechos, y forzó su dimisión. El presidente, además, impulsó reformas en el Código Penal con las que agravaba las penas por este tipo de acciones consideradas “subversivas”. Interpretado por algunos justicialistas como un decidido apoyo político de Perón a sus respectivas facciones, estos cambios fueron vistos por otros como jugadas estratégicas del anciano líder en función del proceso político y revolucionario en marcha, según sus propias opiniones. Lo cierto es que en el escenario bonaerense se reproducía y de algún modo se anticipaba el dramático y violento enfrentamiento entre diversas facciones del peronismo, que se intensificó a partir de la muerte de su líder y signó el crecientemente enrarecido clima político provincial hasta el advenimiento de la dictadura militar.

Las políticas económicas reflejaron también una parábola que se articulaba con esos alineamientos políticos y, a la vez que tramitaba de manera cada vez más extrema las tensiones previas, adelantaba el sesgo que se impondría finalmente en marzo de 1976. En efecto, en una primera etapa el plan económico de José Gelbard (ministro de Economía desde la asunción de Cámpora hasta octubre de 1974) constituyó un nuevo –y úl-

timo— intento por reeditar, con importantes actualizaciones, el modelo “nacional-popular” que había inaugurado el peronismo en los años cuarenta. Se trataba, como entonces, de potenciar un crecimiento industrial basado en una fuerte presencia del capital nacional, combinado con políticas redistributivas favorables a los sectores populares. Las novedades incluían la intención de fomentar activamente las exportaciones industriales, al abrir nuevos mercados y aplicar subsidios específicos, y también un proyecto de ley agraria que apuntaba a forzar una reconversión productiva del sector. Las tensiones políticas, la escasa respuesta del sector empresario y las dificultades estructurales del capitalismo argentino hicieron insostenible este esfuerzo por volver a conciliar acumulación con distribución. Tras algunos intentos de paliar la creciente inestabilidad económica a través de políticas gradualistas, a mediados de 1975 —y de la mano del fuerte peso que había adquirido en el gobierno la ultraderecha peronista— la designación de Celestino Rodrigo como ministro de Economía significó un drástico giro en la orientación de la política económica. El Rodrigazo constituyó un intento de “resolver” las dificultades inclinando la balanza en favor de un proyecto fuertemente excluyente que anticipaba el rumbo que instalaría a sangre y fuego la dictadura a partir de marzo de 1976. Una fuerte devaluación del orden del 100%, un brutal aumento de tarifas y la liberación de los precios, en un contexto en el que los sindicatos acababan de negociar aumentos que promediaban el 38%, constituían un golpe de timón que confluía con la pretensión de privilegiar la rentabilidad empresaria y apostaba a recuperar el dominio pleno del proceso económico por parte de los sectores más concentrados del capital. La coyuntura de mediados de 1975 marcó un punto de inflexión: el sólido desarrollo que venían teniendo las corrientes sindicales más combativas (expresado en las coordinadoras interfabriles) se vio confrontado no sólo por el plan económico de Rodrigo sino por el dramático avance de una represión semiclandestina desplegada por aparatos armados que tenían un claro anclaje en el ámbito del Estado. El intento del sector más reaccionario del peronismo por encontrar una fórmula de permanencia en el gobierno a través de esta alianza represiva y regresiva con el poder económico más concentrado se hallaba no obstante destinado al fracaso: los sectores dominantes y las Fuerzas Armadas ya estaban decididos a tomar el control de manera más directa a través de un nuevo golpe militar.

LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón, en una operación que a esa altura ya era bastante previsible y en cierta medida “anunciada”. Quizás esto haya contribuido a su aceptación pasiva por una parte muy importante de la sociedad argentina que recibió la noticia como algo inevitable; no era la primera vez que las Fuerzas Armadas ocupaban el poder, y la percepción de caos que –alentada por los grandes medios de prensa– se había vuelto predominante durante el año 1975, ayudaba a naturalizar la posibilidad de una nueva intervención militar. La aceptación resignada, e incluso el apoyo explícito de muchos ciudadanos y ciudadanas de las clases medias y populares que entendían como necesaria la implantación “del orden”, no debe sin embargo hacer lugar a una interpretación que diluya las responsabilidades de los sectores que deben ser señalados como promotores y cómplices de la nueva dictadura cívico-militar que se instalaba. En efecto, el golpe de 1976 respondió a un proyecto que, si no estaba formulado de manera homogénea y precisa en todos sus componentes, sí tenía la suficiente consistencia como para articular a una poderosa coalición de actores sociales, económicos y políticos dispuestos –una vez más, pero con más violencia que nunca– a implantar una profunda reestructuración de las relaciones de poder social en el país.

Las Fuerzas Armadas tenían diferencias internas importantes pero confluían en la necesidad de restablecer de modo definitivo los mecanismos de dominación ante un proceso de radicalización política –aquel entramado de militancias en distintos ámbitos que hemos descripto más arriba, y que distaba mucho de limitarse a la presencia de organizaciones armadas– que era lo suficientemente disruptivo como para resultar amenazante a los ojos de los militares. En este objetivo coincidían los sectores dominantes en general: las fuerzas políticas conservadoras, las grandes empresas periodísticas y también las cúpulas de la Iglesia Católica, que sentían la amenaza de la radicalización en su propio seno; y sin duda, similar percepción fue el principal motivo por el cual el gobierno estadounidense apoyó éste y otros golpes militares de la región.

Pero al mismo tiempo, sobre todo entre los empresarios aunque también entre los militares, existía la voluntad de suprimir, de forma estructural, la capacidad de resistencia y de veto que la clase obrera argen-

tina había acumulado desde la época del primer peronismo. Sin duda las corrientes combativas del sindicalismo habían llevado esta capacidad de resistencia a niveles mucho más extremos respecto del control empresarial del proceso de producción, pero en el fondo era una situación estructural de organización y poder de lucha la que se pretendía aniquilar. Las limitaciones propias del capitalismo argentino habían agudizado las tensiones de clase y para la burguesía vernácula resultaba fundamental llevar a fondo el proceso de “desempate” social (o de una reestructuración regresiva de las relaciones de fuerza entre sectores dominantes y trabajadores) que la dictadura de Onganía no había podido consolidar. Confluían entonces, en torno a la voluntad golpista y represiva de esta coalición cívico-militar, dos grandes dimensiones de un nuevo proyecto refundacional: por un lado, la necesidad de recomponer –en todos los ámbitos de la vida social– la hegemonía amenazada por la militancia radicalizada; y, por el otro, la intención de forzar una fuerte ofensiva sobre la clase trabajadora para incrementar los niveles de explotación, limitar o eliminar viejas conquistas obreras y al mismo tiempo reducir su capacidad de resistencia.

Es cierto que las políticas económicas de la dictadura –en especial durante el gobierno de Videla, mientras estuvieron a cargo de José Alfredo Martínez de Hoz– tuvieron algunos componentes de corte claramente neoliberal: la apertura comercial, la liberalización financiera y un discurso eficientista y pro mercado fueron antecedentes tempranos de un giro hacia el neoliberalismo que recién se consolidaría en América Latina en general y en Argentina en particular desde mediados de la década de 1980 en adelante. Las políticas del gobierno militar fueron en realidad un resultado híbrido de orientaciones y presiones cruzadas, que incluyeron también –junto a aquellas primeras manifestaciones de un proyecto neoliberal aún no consolidado como tal– una profundización de las intervenciones estatales que implicaban una asistencia específica a los grandes grupos económicos. Y más que una receta impuesta por los organismos financieros internacionales, los elementos neoliberales (combinados con la política de la “tablita cambiaria” que generó un rápido abaratamiento del dólar) parecían ofrecer en realidad una manera de dismantelar algunos elementos estructurales del capitalismo argentino que sostenían la capacidad de lucha de la clase obrera. Así, el deterioro del tejido industrial –y la consecuente caída del empleo fa-

bril— en conjunción con el desplazamiento parcial del modelo de acumulación hacia la valorización financiera significó una importante desestructuración de los anclajes que sostenían, desde el plano económico, la fortaleza organizativa de los trabajadores. En este sentido, suele pasarse por alto que, junto a la política económica propiamente dicha, la dictadura desplegó desde el primer momento una fuerte ofensiva antiobrera en varios niveles complementarios: una brutal reducción del salario real (que cayó al menos en un 35% en 1976), la suspensión de numerosas cláusulas favorables a los trabajadores en los convenios colectivos de trabajo, la modificación regresiva o eliminación de más de cien artículos de la ley de Contrato de Trabajo, una batería de medidas represivas respecto de la actividad sindical y huelguística, y una nueva legislación intensamente pro empresarial con relación al trabajo agrario.

El brutal impacto de estas medidas pudo verse rápidamente en el ámbito del cinturón industrial del conurbano bonaerense, tal como se analizará en el sexto volumen de esta colección. Sin embargo, su aplicación no sólo registró cambios y reacomodamiento de fuerzas en el espacio fabril del Gran Buenos Aires. Tal como explica Juan Manuel Villulla en su capítulo de este volumen, donde analiza la experiencia de los obreros rurales bonaerenses durante la segunda mitad del siglo XX, el arribo de la dictadura militar al interior provincial conmocionó fuertemente a los trabajadores del campo. El nuevo Régimen Nacional de Trabajo Agrario, señala Villulla, posibilitó el despido de trabajadores sin indemnización y la vuelta a la discrecionalidad patronal a la hora de fijar las condiciones y la duración de la jornada laboral. Además, la instancia de negociación sindical fue restringida a nivel local, llevándola a un espacio más amplio que ni siquiera tenía carácter resolutivo. En ese contexto, los trabajadores rurales bonaerenses que quisiesen presentar sus reclamos y demandas frente a los patrones, debían hacerlo ante una Comisión Asesora Regional compartida con la provincia de La Pampa. Y, si a pesar de todas estas trabas, algún trabajador persistía en su intención de reclamar, igualmente no podría hacerlo. Dicha Comisión Asesora Regional no se puso en funcionamiento sino hasta principios de los años noventa, mucho después del final de la dictadura, cuando ya se había consolidado el modelo neoliberal aplicado, en este caso, a la producción y el trabajo rural.

Las consecuencias de la política económica de la dictadura militar aplicada durante estos años afectaron otras formas de organización so-

cial y económica que habían estado muy arraigadas en el ámbito rural bonaerense. De la importancia del cooperativismo agrario —que creció con el siglo XX y alcanzó su etapa más floreciente durante las décadas del cuarenta y cincuenta— pasamos a estos últimos años de la década del setenta cuando se inicia su proceso de decadencia. Tal como explica Graciela Mateo en su capítulo, este declive puede atribuirse a numerosos factores no solamente coyunturales sino de más largo aliento. Por ejemplo, la reducción de las pequeñas y medianas explotaciones, sustento del sistema comercial cooperativo; la aparición de nuevas formas de organización de la producción a través de los *pools* de siembra y fondos de inversión directa; la privatización y desregulación de puertos y actividades conexas, como los servicios de carga ferroviaria; la concentración y centralización del capital comercial en un reducido grupo de empresas, en su mayoría filiales de firmas multinacionales del agrocomercio; y la aparición de cadenas de súper e hipermercados en las principales ciudades del interior bonaerense, que desplazaron a las cooperativas en el aprovisionamiento de la familia rural. Sin embargo, estos mismos factores que vemos desplegarse a lo largo de las últimas dos décadas del siglo XX tienen un punto de referencia clave en los años de la dictadura militar, especialmente a partir de la reforma financiera introducida en 1977, que sentó las bases para los cambios aludidos.

Podemos decir, entonces, que esta ofensiva capitalista es la que constituye el eje articulador de las políticas de la dictadura: tanto el discurso como ciertos elementos propios del neoliberalismo incluidos en ellas deben entenderse como aspectos que convergen en torno a aquel objetivo primario y fundante. Y es en convergencia con este plan de profunda reestructuración social regresiva y de la voluntad de recomposición hegemónica que debe interpretarse también el sentido de la dimensión más salvajemente represiva que tuvo esta última dictadura, la que se sintetiza en la detención, tortura y asesinato de miles de militantes políticos y sociales llevados a cabo bajo el *modus operandi* de la “desaparición de personas”. No se trató, como todavía suele afirmarse, de un exceso metodológico de militares desquiciados que actuaron indiscriminadamente en procura de vencer a un enemigo cuya magnitud exageraban. Fue un plan sistemático promovido institucionalmente por las Fuerzas Armadas pero también por empresarios, dirigentes conservadores y cúpulas eclesiásticas que, complementado con las políticas so-

cioeconómicas desplegadas, se propuso someter a los sectores populares a una más profunda explotación y dominación. La provincia de Buenos Aires sintetizó de manera paradigmática los objetivos y los resultados de esta ofensiva. En ella se sintió particularmente tanto la reestructuración regresiva de la industria como el avance de las grandes explotaciones rurales, así como el creciente deterioro del mercado de trabajo y de los ingresos populares. Ciudades como La Plata (y en términos más generales la región conformada por los municipios de Berisso y Ensenada), Bahía Blanca y Mar del Plata, entre otras, resultaron especialmente reprimidas por tener un fuerte componente obrero y estudiantil en sus poblaciones. Alrededor de sesenta centros clandestinos de detención funcionaron en territorio bonaerense, cuyas distribuciones territoriales y características se explican en el capítulo de Laura Lenci. No pocos de los episodios más terribles del terrorismo de Estado tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que abarcaron universidades, fábricas, talleres, oficinas, casas particulares. Ni el más íntimo de los espacios quedó fuera del alcance de esta ola de terror que tuvo, a nivel bonaerense, figuras tristemente célebres como la de Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante los primeros años de la dictadura.

Ahora bien, si la dictadura de 1976 fue exitosa en este objetivo de inaugurar un fuerte proceso de reestructuración regresiva de la sociedad argentina, no lo fue a la hora de alcanzar niveles aceptables de crecimiento y de estabilidad económica, componentes necesarios para sostener una legitimación política que perdurara más allá de la aceptación inicial y de los efectos paralizantes de la represión. Ya en 1981 las políticas de Martínez de Hoz habían desembocado en una aguda crisis macroeconómica y generado cierta oposición en algunos sectores empresarios que, beneficiados globalmente como empleadores, se veían afectados en sus intereses sectoriales más específicos. Por otra parte, las Fuerzas Armadas tampoco pudieron ponerse de acuerdo en torno a un plan para conducir la dinámica política hacia una eventual salida que implicara traspasar el poder a un sistema de partidos reformulado y controlado. Hacia comienzos de 1982, la crisis económica y la reaparición en escena de los partidos, junto con la reactivación del movimiento obrero y la creciente visibilidad de los movimientos de derechos humanos que develaban las atrocidades cometidas por la dictadura, habían

producido un giro en el talante social, en el que predominaba ya un sentimiento de rechazo al gobierno militar. En esta coyuntura, los militares intentaron recuperar la legitimación perdida a través de la invasión de las islas Malvinas, al interpelar a la sociedad civil en función de una causa nacional. La localización, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, de numerosos cuarteles del Ejército, bases de la Marina y de la Fuerza Aérea implicó una gran movilización de soldados y recursos. Estos despliegues hicieron que la guerra estuviese presente en la vida cotidiana de los bonaerenses durante su corto desarrollo. El fracaso estrepitoso de un conflicto que duró muy poco pero dejó un saldo trágico en pérdidas humanas terminó de inclinar la balanza en contra de la dictadura, y los militares debieron aceptar una vuelta al sistema constitucional en condiciones que no pudieron manejar como hubieran querido. Lejos de poder reformular las bases del sistema político argentino, el gobierno militar terminó rehabilitando a los partidos preexistentes y convocando a elecciones generales para el 30 de octubre de 1983 en los términos que fijaba la Constitución.

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS DESIGUALDADES BAJO LA HEGEMONÍA NEOLIBERAL

Esta nueva coyuntura electoral marcó importantes novedades respecto de algunos rasgos que la dinámica política argentina había tenido hasta 1976. En primer lugar, se había construido una “transición a la democracia”: por primera vez los principales partidos aceptaban plenamente el juego democrático como algo definitivo, sin pretensiones de excluir adversarios, al tiempo que se consolidaba una nueva –o resignificada– dicotomía simbólica entre democracia y autoritarismo que no había funcionado como tal en la historia previa a la dictadura. En segundo lugar, por primera vez elecciones limpias no daban lugar al triunfo del peronismo: el 30 de octubre de 1983 se impuso la UCR con un 52% de los votos, en un escenario muy polarizado con el Partido Justicialista, que quedó en segundo lugar con el 40%. Bajo el liderazgo renovador de Raúl Alfonsín, ese partido había logrado capitalizar –y contribuido a construir– el fuerte imaginario antidictatorial, al emerger como la fuerza política que de manera más convincente pudo exhortar a una socie-

dad en la que la construcción de la democracia se había instalado como objetivo predominante. La provincia de Buenos Aires acompañó el triunfo de Alfonsín al imponerse la fórmula radical integrada por Alejandro Armendáriz y Elba Roulet para el período 1983-1987.

Al gobierno de Alfonsín le tocó afrontar el doble desafío de una situación que no tardó en revelarse como mucho más compleja de lo que el optimismo inicial de la recuperación democrática pudo disimular en un primer momento. Por una parte se trataba, precisamente, de convertir a la naciente democracia en un régimen político estable y consolidado; y en este sentido, el entusiasmo de aquellos días de 1983 parecía poder expresarse también en un diagnóstico socioeconómico en el que, como decía el presidente Alfonsín en sus discursos de campaña, “con la democracia se come, se cura, se educa”. El alfonsinismo logró dotar a la transición política de contenidos progresistas y democratizadores en el plano cultural y educativo, y llevó a cabo un juicio a los máximos responsables del genocidio perpetrado por la dictadura saliente que produjo condenas para los principales miembros de las juntas militares que no era posible imaginar poco tiempo antes (el impulso por condenar a los militares se detuvo sin embargo a partir de 1987 cuando, tras el alzamiento de Semana Santa, la ley de Obediencia Debida dispuso eximir del enjuiciamiento a los cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas que habían participado en la represión). Con sus alcances y sus límites, el proceso político pudo estabilizarse en torno a parámetros democráticos que ya no volverían a ser puestos en duda.

Al cabo de cuatro años de mandato, desde el retorno a la democracia, llegó el turno de renovar muchas de las gobernaciones, dado que el mandato presidencial todavía se extendía a seis años (recién se redujo a cuatro a partir de la reforma constitucional de 1994). En la provincia de Buenos Aires, las elecciones de 1987 marcaron algunos de los límites políticos del alfonsinismo. Los comicios bonaerenses significaron, con la elección de Antonio Cafiero, el retorno del peronismo al poder provincial. Esta fuerza política ya no abandonaría la gobernación de Buenos Aires, sorteando los convulsionados tiempos de la crisis del 2001 (con la cual termina este volumen), y se proyectó en el poder más allá de la primera década del siglo XXI. Explicar los factores que incidieron para esa prolongada permanencia es uno de los objetivos del capítulo de Marcela Ferrari. La autora analiza la incidencia de los avatares polí-

ticos protagonizados por los gobiernos nacionales y bonaerenses desde el retorno de la democracia. El impacto de estos altibajos en el humor político del electorado, el desarrollo de las internas de los partidos mayoritarios en este período y la versatilidad de los dirigentes peronistas para la reconversión de sus posturas políticas en las distintas etapas de estos años son algunos de los componentes a través de los cuales Ferrari colige la permanencia justicialista en la casa de gobierno de La Plata.

Pero mientras se iban recorriendo estos caminos políticos en los años iniciales de la democracia recuperada, también se pondría rápidamente de manifiesto que la dictadura no sólo había dejado como legado un pronunciado retroceso en las condiciones sociales y laborales, sino que además había agravado y profundizado los problemas estructurales del capitalismo argentino; y que dejaba al mismo tiempo como herencia un Estado devastado y expuesto a déficits fiscales y macroeconómicos que condicionaban fuertemente las posibilidades de acompañar a la democratización política con la recuperación de un horizonte sostenible de crecimiento y redistribución. Las relaciones de fuerza sociales habían cambiado drásticamente: la dura derrota infringida por la represión a los sectores populares conllevaba como contracara una enorme concentración del poder económico, particularmente en manos de un conjunto de grandes conglomerados de capital nacional a los que las políticas de la dictadura les habían permitido diversificarse notablemente y adquirir un poder estructural sin precedentes; contrariamente a lo que prometía el discurso liberal, ello no se reflejaba precisamente en un mayor dinamismo del capitalismo argentino, ya que los grandes empresarios habían acomodado sus decisiones de inversión a reglas del juego que les permitían obtener rentabilidades extraordinarias sin necesidad de innovar ni de volverse competitivos.

Por otra parte, la herencia de las políticas militares incluía un aumento exponencial de la deuda externa, que había pasado de alrededor de 8.000 millones de dólares en 1975 a cerca de 46.000 millones en 1983; la deuda suponía una fuerte carga adicional para una balanza de pagos ya estructuralmente desequilibrada, y también para cuentas fiscales que a su vez estaban desbalanceadas por el peso de los subsidios y prebendas con las que se había beneficiado al capital más concentrado. Esta situación potenciaba las tendencias inflacionarias que la dictadura tampoco había revertido y que se convertirían crecientemente en el síntoma más visible

de los profundos desequilibrios que atravesaban a la economía argentina. La hiperinflación que se desató a comienzos de 1989 (que llegó a picos cercanos al 200% mensual a mediados de ese año, y que terminó con un incremento anual de los precios de más del 4.000%) forzó el adelantamiento de las elecciones nacionales y la salida anticipada del gobierno de Alfonsín. La nueva coyuntura electoral, en la que se impuso el candidato del Partido Justicialista Carlos Saúl Menem, estuvo signada por una crisis económica que, visualizada como terminal, contribuyó a instalar en la agenda y en el imaginario públicos un diagnóstico que conllevaba la necesidad de adoptar algún giro drástico en las políticas económicas; el paradigma neoliberal, crecientemente hegemónico a nivel mundial y presentado por sus promotores como la receta técnicamente correcta que debía adoptar cualquier economía para asegurar un funcionamiento equilibrado y generar crecimiento, estaba allí disponible para ofrecer a la vez “soluciones de fondo” y un discurso sencillo para legitimarlas.

Cabe pensar, en perspectiva histórica, que podrían haberse construido otras alternativas para salir de la encerrona hiperinflacionaria, con reformas estructurales que pusieran el acento en la redistribución del poder y la riqueza y en un nuevo modo de regulación estatal que dejara de asistir indiscriminadamente al capital más concentrado y procurara en cambio disciplinarlo hacia prácticas al menos más compatibles con un crecimiento sostenible. Pero el neoliberalismo ofrecía a los gobiernos latinoamericanos —y entre ellos al que asumió en la Argentina el 8 de julio de 1989— una salida más fácil, que prometía recuperar rápidamente niveles mínimos de gobernabilidad al aceptar las condiciones que, a cambio de ayuda financiera y un “visto bueno” para las inversiones externas, establecían los organismos financieros internacionales. La dureza y regresividad de esas condiciones, y de las políticas que de ellas derivaban, quedaron temporalmente ocultas por un discurso que, como dijimos, parecía cumplir con expectativas sociales que en medio de una situación insoportable alentaban cualquier cambio de rumbo radical que lograra presentarse como efectivo.

En este contexto Menem adoptó la fórmula neoliberal en todos sus términos e inauguró de ese modo un proceso de reformas estructurales que, si bien le permitieron recuperar la capacidad de gobierno e incluso obtener niveles duraderos de consenso electoral, terminarían no sólo provocando una modificación brutalmente regresiva en los parámetros

de funcionamiento de la sociedad argentina sino que culminarían en el año 2001 en una situación de desequilibrio y recesión de magnitudes inéditas en la historia bonaerense y del país. En realidad, el “modelo” que se configuró a partir de entonces no estuvo únicamente definido por las denominadas “reformas de mercado”, sino también por otros dos componentes que son de igual importancia para comprender su funcionamiento: uno fue la decisión de retomar sistemáticamente los pagos de la deuda externa (suspendidos de hecho desde 1988) y de esa forma reinsertar a la Argentina en el mercado internacional de capitales, al abrir un nuevo período de fuerte endeudamiento; el otro, la adopción de la “convertibilidad” como política cambiaria y monetaria, asignando una paridad fija (un peso = un dólar) y atando la emisión de dinero local a la disponibilidad de reservas equivalente en dólares. Cabe señalar que el tipo de cambio establecido por ley en 1991 quedó de inmediato sobrevaluado y generó un esquema de “dólar barato” que condicionó las posibilidades de incrementar las exportaciones que no fueran naturalmente competitivas, a la vez que sometió a la producción industrial a graves limitaciones en cuanto a su competitividad. Al mismo tiempo la paridad fija significó una suerte de seguro de cambio para las inversiones financieras, las que una vez más se constituyeron en un ámbito de enorme rentabilidad. La inserción en el mercado internacional de capitales implicó en ese contexto una intensa oleada de inversiones, tanto fijas como financieras, y fue el flujo de capitales lo que permitió en buena medida sostener durante diez años el esquema de la convertibilidad; su rápida retirada durante 2001 será, como veremos, debido a rasgos inherentes al modelo mismo, un factor central de su colapso final.

Las políticas neoliberales propiamente dichas suponían dos grandes dimensiones que se entrelazaban: una, reconocida explícitamente en el discurso como tendiente a garantizar un crecimiento económico “eficiente”, procuraba reducir a su mínima expresión la intervención del Estado y dejar el funcionamiento de la economía en manos del libre juego de las fuerzas del mercado; la otra, no tan declamada aunque por momentos asumida como parte de la supuesta solución a los problemas históricos del capitalismo argentino, apuntaba a incrementar los niveles de rentabilidad de las empresas reduciendo lo más posible el costo laboral y la carga impositiva sobre la inversión privada. En su dimensión “pro mercado”, el nuevo conjunto de reglas del juego que se estableció a partir de

1989 incluía un sistemático plan de privatizaciones que terminó con todo vestigio del Estado empresario y en el que grandes capitales locales y extranjeros, así como acreedores externos, encontraron la posibilidad de incorporar nuevos y rendidores negocios; una apertura comercial externa que alcanzó niveles más profundos que la implementada por Martínez de Hoz y que expuso a los productos nacionales a una abrupta competencia con las importaciones; la liberalización financiera, que dejaba en manos de los bancos las decisiones sobre el nivel de las tasas de interés y la disponibilidad de créditos; la implementación de un sistema mixto de jubilaciones y pensiones que convertía a la seguridad social en una nueva oportunidad de negocios para el sector privado, al que también se le abría el juego en el ámbito de las aseguradoras por riesgos del trabajo y en el de la cobertura de salud; y una drástica desregulación de los distintos mercados y ámbitos de inversión, que despejaba el camino al capital privado para una expansión sin obstáculos (en algunos casos, como el de la minería, la desregulación era reforzada por leyes que aseguraban al sector privado ventajas específicas destinadas a estimular la inversión). La dimensión más directamente “pro empleador” del nuevo modelo de políticas incluyó una sucesión de leyes y decretos de “flexibilización laboral” que fueron habilitando nuevas formas de contratación de trabajadores, legales pero precarias, las que acompañaron un proceso que, en los hechos y más allá de toda regulación, incrementó exponencialmente la cantidad de trabajadores que no tenían contrato ni registro alguno; al mismo tiempo, se estableció que los aumentos salariales se otorgarían en función de los aumentos de la productividad, por lo que se congelaron por más de una década las negociaciones colectivas. El corsé impuesto por la convertibilidad profundizó el reclamo empresario por reducir el costo laboral: la imposibilidad de incrementar los niveles de competitividad (y de rentabilidad) a través de ajustes en el tipo de cambio convertía al salario y a la mayor explotación de la fuerza de trabajo en variables de ajuste cada vez más necesarias para sostener el modelo sin afectar las ganancias del capital.

Una vez más, sin embargo, el enorme despliegue de oportunidades para el capital más concentrado no habilitó una dinámica de crecimiento que implicara alguna reversión de los límites estructurales de la economía argentina; por el contrario, los crecientes niveles de rentabilidad se vincularon con estrategias centradas o bien en la especulación financiera o en inversiones productivas que no modificaban (y en buena medida

agudizaban) el perfil primario y débilmente competitivo del capitalismo argentino. En una primera etapa, el “modelo” logró mostrar algunos resultados macroeconómicos que podían presentarse como positivos: el crecimiento se recuperó con tasas significativas de aumento del PBI entre 1991 y 1994, y la caída de 1995 atribuida al efecto de la crisis mexicana pudo a su vez ser revertida entre 1996 y 1997, aunque ya a un ritmo menor; paralelamente, la convertibilidad y el impacto inicial de las reformas estructurales lograron consolidar una estabilidad de precios (y del tipo de cambio) que se mantuvo hasta fines de 2001. Las luchas y resistencias de los primeros años, aunque sin duda expresaban en distintos ámbitos los profundos costos sociales subyacentes, quedaron durante un tiempo eclipsadas en un contexto en el que el menemismo logró hacer prevalecer el consenso respecto de los éxitos aparentes del nuevo esquema, que parecía justificar el cambio de rumbo adoptado.

En 1995 Menem fue reelecto para un nuevo mandato presidencial (ahora por cuatro años, tras la reforma constitucional de 1994) y en la provincia de Buenos Aires se impuso también el oficialismo encabezado por Eduardo Duhalde (electo por primera vez como gobernador en 1991 y reelecto en 1995). A lo largo de esta década del noventa, pero sobre todo en la segunda parte, las disputas políticas entre el gobernador bonaerense y el presidente, ambos peronistas, fueron veladas pero constantes. Al mismo tiempo, el supuesto equilibrio entre costos y beneficios de las políticas aplicadas no tardaría en revelarse como precario en la medida en que adquiriría creciente visibilidad la brutal transformación que las políticas en curso iban produciendo en el tejido social bonaerense y de toda la Argentina. El neoliberalismo y la convertibilidad se potenciaron mutuamente para dejar una sociedad fragmentada, muy polarizada, atravesada por niveles inéditos de desempleo, subempleo, precarización laboral, pobreza e indigencia. En las grandes ciudades del interior de la provincia y en particular en el conurbano bonaerense, los efectos sociales se hicieron sentir con fuerza al caer en picada el empleo industrial formal y consecuentemente el ingreso de los sectores populares urbanos. Por ejemplo, durante varios momentos de esos años, Mar del Plata ostentó el triste récord de ser la ciudad con mayor porcentaje de desocupados del país.

Como contrapartida a este panorama desolador, se hacía notar de manera ostentosa el enriquecimiento de sectores muy concentrados de

las clases dominantes y de una clase media alta que logró capturar los beneficios que, en determinados negocios habilitados por el modelo, no dejaban de crecer. Más allá del conurbano, en el interior de la provincia de Buenos Aires el proceso de transformación regresiva se manifestó especialmente en un sector agrario en el que el estancamiento cambiario provocó una fuerte concentración de las explotaciones y la consecuente quiebra de numerosos pequeños y medianos productores. Zonas enteras de la provincia participaron de la gran expansión de la producción sojera, sobre todo a partir de la incorporación de la soja transgénica habilitada en 1996; mientras tanto, la región bonaerense sufría también las consecuencias del modelo en la significativa caída relativa del sector industrial.

En suma, el gobierno de Menem terminó de dismantelar todo aquel entramado de regulaciones estatales consolidado al comienzo del período que nos ocupa —que ya había comenzado a ser erosionado por la dictadura— y afianzó al mismo tiempo la firme ofensiva empresarial que el gobierno militar había impulsado desde 1976 y que alcanzó niveles sin precedentes a fines de la década del noventa. El menemismo significó también una importante resignificación de la tradición nacional-popular y de las claves organizativas que hasta entonces habían caracterizado al Partido Justicialista. La reorientación hacia el neoliberalismo implicó un nuevo retroceso de las dimensiones más confrontativas que el discurso peronista albergaba desde su origen; potenció en cambio una dimensión integradora que incluso subordinaba los componentes reformistas-distributivos a la voluntad de priorizar el crecimiento y el orden. La provincia de Buenos Aires reflejó este giro con particular intensidad durante los dos gobiernos de Eduardo Duhalde; allí se desplegó una red de relaciones clientelares centrada en punteros y “manzaneras” que, a través de la implementación de planes de asistencia focalizada, logró consolidar una considerable estructura de dominación territorial, al desplazar el rol que anteriormente tenían los sindicatos como base de la organización partidaria. A su vez, la reducción de varios puntos de la coparticipación federal que correspondía a la provincia de Buenos Aires, ocurrida durante los primeros años del retorno a la democracia, privó a esta provincia de importantes fondos y agudizó la dependencia y los conflictos entre las autoridades nacionales y bonaerenses. Así, durante los primeros años del gobierno de Duhalde se procuró compensar esa situación a través de fondos

especiales girados de la nación a la provincia y destinados especialmente al conurbano bonaerense, lo cual permitió la expansión y consolidación de dicha red clientelar.

Ahora bien, el acelerado proceso de desintegración social se reflejó a la vez en significativas modificaciones en el plano de la acción colectiva de protesta. El movimiento obrero en su forma clásica perdió fuerza, y si las luchas sindicales no desaparecieron sí se vieron limitadas por el desempleo y la precarización, en un contexto en el que las reivindicaciones por el salario y por las condiciones laborales retrocedían frente al imperativo de conservar las fuentes de trabajo. Muchas dirigencias sindicales, por otro lado, optaron por mantenerse leales a la conducción menemista y por negociar la aceptación de las nuevas reglas del juego a cambio de preservar prerrogativas inherentes a la propia organización gremial (por ejemplo, el control de las obras sociales). En ese marco, otros dirigentes apostaron por romper con la orientación conciliadora que se hizo fuerte en la cúpula de la CGT y, desde dentro o desde fuera de ella, impulsaron nuevas prácticas y horizontes de lucha que apuntaban a vincular la lucha sindical con proyectos políticos más amplios que cuestionaran la hegemonía neoliberal. La mayor novedad de los noventa fue la progresiva emergencia de nuevos actores que, por fuera del marco de los sindicatos y de los partidos tradicionales, fueron convergiendo en torno a un campo de protesta que a fines de la década abarcaba un amplio abanico de organizaciones sociales, reclamos y repertorios de lucha en distintos puntos de la geografía bonaerense y del país entero. El más visible de esos fenómenos emergentes de protesta fue sin duda el que dio lugar a los movimientos de trabajadores desocupados, con epicentros en algunas ciudades del interior bonaerense y particularmente en el Gran Buenos Aires. Pero a las reivindicaciones ligadas a la pobreza y al deterioro de las condiciones laborales se fueron sumando también otros reclamos que se centraban en hechos de violencia policial, en casos de corrupción y en un nuevo impulso a la agenda de los derechos humanos, que instalaban un creciente cuestionamiento al menemismo como fenómeno político. Al mismo tiempo, durante estos años se fue instalando en la agenda pública y en los medios de comunicación la problemática de la “inseguridad”, que tuvo fuerte impacto y en parte motivó la reconfiguración de la justicia y las instituciones de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En las elecciones de 1999 se impuso a nivel nacional la Alianza entre la UCR y el FrePaSo, un nuevo agrupamiento partidario que apuntaba al espacio de centro-izquierda y que se nutría en buena medida de militantes peronistas descontentos con la orientación que le había impreso el menemismo al PJ. En Buenos Aires, sin embargo, la red duhaldista de dominación territorial y cierto conservadurismo de los pueblos del interior de la provincia –que pueden verse en el análisis y los datos aportados por Marcela Ferrari en su capítulo– contribuyeron a garantizar la continuidad de la hegemonía del peronismo menemista a través de la fórmula encabezada por Carlos Ruckauf y Felipe Solá.

El discurso de la Alianza criticaba el estilo político del gobierno y ponía el foco en los efectos sociales del modelo aunque no cuestionaba las bases del esquema apoyado en la convertibilidad. Todavía era difícil, en efecto, que las fuerzas políticas que disputaban en el terreno electoral se atrevieran a arriesgar alternativas frente a un esquema monetario que, en el imaginario colectivo, seguía gozando del prestigio de haber consolidado la estabilidad. Mientras los costos sociales se volvían cada vez más intolerables, no eran igualmente visibles los problemas específicamente económicos que arrastraba el modelo de acumulación y que, en contraposición a lo que en todo caso podían aceptar como límite sus defensores, no se debían a los recurrentes golpes de carácter externo sino a las vulnerabilidades y limitaciones inherentes al propio esquema que combinaba neoliberalismo con convertibilidad. Pero esos problemas existían e iban erosionando aceleradamente la capacidad del modelo de sostener niveles aceptables de crecimiento e incluso la gobernabilidad económica aparentemente consolidada. Desde octubre de 1998 la economía dejó de crecer, y la provincia y el país quedaron sumidos en la recesión más prolongada y profunda de su historia, que culminó en 2002 con una caída del 10% en el PBI.

Si por un lado la sobrevaluación cambiaria obturaba las posibilidades de encontrar nuevas vías de crecimiento por el lado del sector externo, el mercado interno tampoco era una alternativa dinamizadora, debido a los mencionados efectos del esquema neoliberal sobre los ingresos de los sectores populares y medios. A eso se sumaba un Estado crecientemente deficitario, atravesado por el peso de una deuda pública que se había incrementado exponencialmente y por la disminución de los ingresos fiscales provocada por la propia recesión y por algunos aspectos

de las políticas en curso. Diluido ya el impacto “de una sola vez” que las privatizaciones habían producido en los ingresos públicos, la semi-privatización del sistema de seguridad social había derivado una parte significativa de los aportes patronales a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones); al mismo tiempo, lejos de incluir una reforma impositiva progresiva, el modelo conllevaba un creciente peso de impuestos indirectos que, como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), dependían fuertemente del consumo popular y del nivel de actividad económica; y a su vez, las políticas gubernamentales tendían a satisfacer los crecientes reclamos empresarios, con una reducción más profunda de la ya históricamente débil presión impositiva sobre inversiones y ganancias. A medida que la recesión se agudizaba, lo hacía también el déficit fiscal, y la salida de divisas superaba con creces a los ingresos, al poner a la balanza de pagos en una situación de extrema precariedad. Cuando en el año 2001 estos síntomas visibles se reflejaron en una creciente desconfianza de los inversores externos y los capitales comenzaron a fugarse masivamente, el equilibrio macroeconómico de la convertibilidad quedó pendiendo de un hilo, mientras las respuestas ortodoxas implementadas desde el gobierno no hacían más que agudizar las deficiencias estructurales del modelo. El creciente descontento social no dejó de sumar nuevos afectados hasta que las jornadas del 19 y 20 de diciembre condensaron una diversidad de protestas y acciones políticas que terminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. También en la provincia de Buenos Aires, territorio donde se concentró buena parte de las heterogéneas pero convergentes acciones opositoras, el entonces gobernador Carlos Ruckauf optó por renunciar.

El año 2001, y con él la etapa de la que se ocupa este volumen, terminaba así en medio de un horizonte sombrío atravesado por hechos y situaciones sin precedentes. Por primera vez un gobierno civil era destituido no por un golpe militar sino por una sublevación popular; el sistema político de la democracia recuperada en 1983 quedó así expuesto a una prueba tan difícil como inédita, que sin embargo logró superar dentro de los canales institucionales establecidos y a partir de la rearticulación política que, una vez más, fue capaz de llevar adelante el peronismo. La crítica coyuntura de 2001 y la devaluación resultante agravaron notablemente la situación de los sectores populares. Como dijimos al comienzo, la sociedad argentina había caído en extremos de exclu-

sión, precarización y desigualdad que contrastaban dramáticamente con los niveles de integración que, con las limitaciones propias de una economía capitalista dependiente, había alcanzado hasta mediados de los años setenta. La fuerte contraofensiva que los sectores dominantes habían impulsado desde 1976 culminaba al comenzar el nuevo siglo en un profundo desequilibrio del poder social y económico en favor de aquellos. Aun así, frente a este panorama en el inicio del tercer milenio, a un par de décadas de distancia de cumplir el bicentenario del nacimiento de la provincia de Buenos Aires, sus habitantes se disponían una vez más a renovar esfuerzos para tratar de remontar esa situación crítica y encarar el futuro con cauteloso optimismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aelo, Oscar H.: *El peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1955*, Caseros, Eduntref, 2012.
- Altamirano, Carlos (ed.): *Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires-Bernal, Ariel-Universidad Nacional de Quilmes, 1999.
- Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano (comps.): *Perón, del exilio al poder*, Buenos Aires, Cántaro, 1993.
- Balsa, Javier: *El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 1937-1988*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2006.
- Barba, Fernando y Demaría Massey de Ferré, María Elena: *La provincia de Buenos Aires, 1910-1987*, La Plata, Dirección de Servicios Generales del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 1987.
- Barrancos, Dora: *Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos*, Buenos Aires, Sudamericana, 2008.
- Basualdo, Eduardo: *Estudios de Historia Económica Argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI-FLACSO, 2006.
- Castellani, Ana: "Intervención económica estatal y transformaciones en la cúpula empresaria durante la última dictadura militar (1976-1983)", en Clara E. Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comps.): *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado*, México, El Colegio de México, 2007.

- Cavarozzi, Marcelo: *Autoritarismo y democracia (1955-1996)*, Buenos Aires, Ariel, 1997.
- Devoto, Fernando y Madero, Marta (dirs.): *Historia de la vida privada en la Argentina. La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad*, t. III, Buenos Aires, Taurus, 1999.
- Gil Lozano, Fernanda; Pita, Valeria Silvina e Ini, María Gabriela: *Historia de las mujeres argentinas*, t. II, Siglo XX, Buenos Aires, Taurus, 2000.
- Girbal-Blacha, Noemí: *Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gestión del doctor Arturo Jauretche (1946-1950)*, Buenos Aires, Ediciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1993.
- James, Daniel: *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- James, Daniel (dir.): *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Buenos Aires, Colección Nueva Historia Argentina, t. IX, Sudamericana, 2003.
- Levitsky, Steven: *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Melón Pirro, Julio C. y Quiroga, Nicolás: *El peronismo bonaerense. Partido y prácticas políticas, 1946-1955*, Mar del Plata, Ediciones Suárez, 2006.
- Novaro, Marcos: *Historia de la Argentina contemporánea. De Perón a Kirchner*, Buenos Aires, Edhasa, 2006.
- Panella, Claudio (comp.): *El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de peronismo provincial*, La Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires-Archivo Histórico “Dr. Ricardo Levene”, 2005-2011, 5 tomos.
- Pucciarelli, Alfredo (ed.): *Los años de Menem: la construcción del orden neoliberal*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.
- Pujol, Sergio: *La década rebelde. Los años 60 en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 2002.
- Ramírez, Ana Julia y Viguera, Aníbal: “La protesta social en la Argentina entre los setenta y los noventa. Actores, repertorios y horizontes”, en *Matériaux pour l’histoire de notre temps*, n.º 81, 2006. Disponible en <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Viguera.pdf>.
- Rougier, Marcelo y Fiszbein, Martín: *La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista, 1973-1976*, Buenos Aires, Manantial, 2006.

- Spinelli, María Estela: *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la "revolución libertadora"*, Buenos Aires, Biblos, 2005.
- Suriano, Juan (dir.): *Dictadura y democracia (1976-2001)*, Buenos Aires, Colección Nueva Historia Argentina, t. X, Sudamericana, 2005.
- Svampa, Maristella: *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires, Taurus, 2005.
- Torrado, Susana et al.: *Estructura social de la Argentina. Indicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al Censo de Población y Vivienda de 1980*, vol. 4, Buenos Aires, Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones-CEPAL, 1989.
- Tortti, María Cristina: "Protesta social y 'nueva izquierda' en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional", en Alfredo Pucciarelli (ed.): *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
- Valobra, Adriana (comp.): *Mujeres en espacios bonaerenses*, La Plata, Edulp, 2009.